

PLAZA PÚBLICA
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Chiapas: ¿Cuál violencia?

Si la rebelión campesina en Chiapas es lo que parece, estamos en presencia de un desafío militar y político al orden establecido. Es comprensible que ese reto surja en Chiapas, cuyo atraso estructural se ha agravado por condiciones adversas y un gobierno deficiente.



Una rebelión campesina. Eso es lo que parece estar ocurriendo en los Altos de Chiapas. Si es así, veinte años después resurge en México la apelación a las armas como recurso político. Si las cosas son como se presentan, no se trata de un movimiento con una demanda particular, que pueda ser atendida tras una presión extrema, como ha solido ocurrir en los últimos años. Es un desafío militar y político a todo el orden establecido. Por eso la buena voluntad de los obispos católicos de esa entidad está destinada a caer en terreno yermo.

Cualquiera que sea el curso y la naturaleza de los acontecimientos, nuestro país no será el mismo después de este estremecedor comienzo de año. Lo que ha gritado con violencia en Chiapas es el México profundo, el México bronco, el que está de más en los planes gubernamentales de modernización. Debemos aproximarnos con el máximo cuidado al examen de una situación inédita, de la que acaso se desprendan consecuencias inimaginables.

La primera hora de 1994 quedó marcada por un estallido armado, que antes de 48 horas había causado ya una cincuentena de muertos, liberó a casi dos centenares de reos y mantenía en poder de los alzados seis municipios del estado de Chiapas. No se sabe si el pasmo o la prudencia del gobierno impidió que la sublevación campesina chiapaneca generará un mayor número de víctimas. De ser parálisis era extraña, sólo explicable si la rebelión no es lo que parece, o si se llegó al extremo de que el gobierno creyera en sus propios desmentidos, que incluían asegurar lo dañino que era hablar de que en Chiapas había guerrilla. Porque de tiempo atrás se sabía que ésta se hallaba en pleno periodo de organización en Chiapas. Y porque es difícil que miles de personas, dotadas de gran capacidad de fuego, con logística eficaz y hasta uniformes, se desplacen dentro de un amplio perímetro sin ser detectados por la fuerza militar.

Es comprensible que sea Chiapas donde brota este foco de insurgencia armada. Las condiciones de atraso que lo colocan entre

las últimas entidades del país en cuanto a desarrollo, se han agravado por circunstancias de todo género. El café, que se cultiva en buena parte de la zona, padece una crisis que depaupera a sus ya empobrecidos cosechadores. Otros productos agropecuarios sufren condiciones de mercado igualmente deficiente. En Las Margaritas, uno de los municipios en conflicto hoy, la cartera vencida de los agricultores los tiene en la desesperación.

El gobierno local es particularmente ineficaz. El secretario de Gobernación, que hace un año retornó de Tuxtla Gutiérrez a la ciudad de México, no se arriesgó a dejar en la gubernatura a un político con experiencia, y escogió a un novato, ligado además con intereses caciquiles, que ha sido un desastre. Como sucede con el interino de todo ejecutivo en ascenso, hay en Chiapas dos gobernadores y ninguno, pues Elmar Setzer Marseille es mal administrador del bien político que el secretario González Blanco Garrido sigue considerando propio.

No obstante las tensiones crecientes en las zonas alteñas, hace meses que nadie atiende a los reclamos de los indios que se apoderaron de la oficina estatal de asuntos indígenas con sede en San Cristóbal de las Casas. sin hallar interlocutor válido. Mientras tanto, nuevos cinturones de miseria rodean a San Cristóbal y otras ciudades. Es

Como sucede con el interino de todo Ejecutivo en ascenso, en Chiapas hay dos gobernadores y no hay ninguno. Sin experiencia política, y ligado a intereses caciquiles, Elmar Setzer Marseille ha resultado un mal administrador de un bien que el secretario de Gobernación considera como propio.

tán formados por decenas de miles de indígenas expulsados de sus comunidades, con el pretexto de su conversión al evangelismo y en realidad porque ponen en riesgo el dominio caciquil, que asegura al PRI una enorme reserva de votos.

Si no fuera porque la sublevación denota condiciones desesperadas y puede provocar una represión masiva, se podría calificarla como un acto de justicia poética. Porque los orígenes del movimiento armado chiapaneco están en acciones que antes u hoy mismo fueron estimuladas por el gobierno, y ahora se vuelven en su contra. Eso, si los hechos son como parecen.

El sacerdote jesuita Mardonio Morales recordó hace apenas cuatro meses que el germen de radicalismo que ha estallado ahora en Chiapas fue sembrado allí por el grupo Línea Proletaria, "cuyas cabezas fueron Adolfo Orive, actual director de capacitación de la Confederación Nacional campesina (CNC), y Hugo Andrés Araujo de la Torre, diputado del PRI y líder de esa central". (Proceso No. 880, 13 de septiembre de 1993). Araujo de la Torre, amigo cercano y antiguo del Presidente de la República, presidió en noviembre el Congreso y en esa calidad dio respuesta al quinto informe de esta administración.

Igualmente, en la organización de los grupos campesinos que ahora eligieron la vía armada, se encuentra el Partido Socialista de los Trabajadores, llamado ahora Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, agrupación de alquiler del gobierno y su partido, destinada a la realización del trabajo sucio, lo que la participación de estos grupos en este desafío armado implica es el alto costo que la manipulación puede significar aun para sus practicantes.

El manifiesto político de la sublevación armada pone especial empeño en retar al Ejército. Su primera acción formal se dirigió, asimismo contra una sede militar, la de la 31a. zona, cercana a San Cristóbal. Sería explicable este encono, porque en los meses recientes menudeó la información sobre incursiones castrenses violentas en varias comunidades. Se había desplegado una estrategia de doble carril, que consistía por una parte en el incremento del gasto social a través de Solidaridad (que se concentraba excesivamente en las cabeceras municipales, y no entraba en el fondo de las cuestiones) y por otro lado en la intensificación de las acciones militares contra la organización social. Eso hace comprensible este enfático desafío al Ejército. Pero tal reto se resolverá, si la previsible derrota del movimiento armado ocurre pronto y sus sobrevivientes se refugian en la selva, en una militarización de Chiapas, favorable al conservadurismo.

PLAZA PÚBLICA

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Norteamérica no, Centroamérica

Los gobiernos federal y estatal han tenido una doble reacción ante el levantamiento de Chiapas igualmente desafortunadas. Por un lado, las autoridades no han comparecido ante la población, iniciativa necesaria ante la dimensión de la crisis, y se pasa por encima de la ley en las acciones militares de respuesta.



Cuando el gobierno y el sector moderno al que ha favorecido, proclamaban la conversión de México en miembro de Norteamérica, desde Chiapas surgió la sonora voz de la insurgencia armada que nos hizo saber en cuánta medida somos Centroamérica. Es verdad que ya no hay combates en El Salvador, donde entre miedos y trampas la paz busca abrirse paso. Pero en Nicaragua no están enterradas por completo las armas, como se vio hace pocos meses. Y en Guatemala, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca sigue remontada, rehusando firmar la paz aunque se la ofrezca un presidente que fue garante de los derechos humanos, como Ramiro de León.

Guatemala: de allá, y de aquí también, surgen rumores de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está influido, o quizá hasta adiestrado, por la URNG. Y se invoca ya el argumento de la extranjería para denostar a los insurgentes. Y eso se hace en la hora en que se canta la inevitabilidad de la globalización y las bondades de las integraciones de todo género. De haber influencia, de cualquier género, de una guerrilla a otra, ¿por qué habría de asombrarnos, teniendo en cuenta la similitud de condiciones vigentes a ambos lados del Usumacinta? El internacionalismo económico, ¿es menos inexorable que el social y político y aun el militar?

Mientras las acciones guerreras continúan en desarrollo en los Altos Chiapanecos, los gobiernos federal y estatal reaccionaron con lentitud. Si el brote insurgente tiene los perfiles que son evidentes, estamos ante una crisis política de gran magnitud. Una multitud armada, capaz de tomar varias poblaciones simultáneamente, ha declarado la guerra, así textualmente, al gobierno de México y ha propuesto el derrocamiento del Presidente de la República. De ese modo se iniciaron muchos de los episodios que hicieron de nuestra patria una república turbulenta en el siglo pasado. Y de esa manera comenzaron también los movimientos que luego hemos dado en llamar la Revolución

Mexicana. No se trata del delirio de un esquizofrénico, ante el cual se suelta la risa o se practica el desdén. Se trata de una tentativa armada, capaz de organización y movilización, cuyos primeros lances provocaron ya quizá un centenar de muertos.

Ante ese desafío, el gobierno ha reaccionado de dos modos a cuál más desafortunado. En el plano formal, actúa como si la crisis no existiera. Se trata de la entidad gobernada hasta hace un año precisamente por el ahora secretario de Gobernación. El estallido muestra la verdadera naturaleza de su gobierno (pues las condiciones de la rebelión no se engendraron sólo en los últimos doce meses y si así fuera, el interino fue y es subalterno suyo), lo que debilita su posición ante el proceso electoral que, como principal tarea, debe encabezar este año. Pero se procede como si se demandara la construcción de un camino, el remedio de una necesidad municipal, la libertad de unas personas presas injustamente. Falta el planteamiento político, que debía correr a cargo del Presidente de la República. No lo hemos visto acudir a la radio y a la televisión, en cadena nacional, como ha hecho

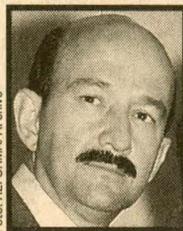


Foto: REFORMA/Archivo

Falta el planteamiento político, que debiera correr a cargo del Presidente de la República. No lo

hemos visto acudir a la radio y a la televisión como hizo en cada uno de los momentos cruciales de la negociación del Tratado de Libre Comercio y aun en tratándose de la vacunación.

para anunciar los momentos cruciales del Tratado de Libre Comercio y aun para estimular el que se participe en las campañas de vacunación. Si un saludo de año nuevo estaba previsto, era apremiante anticiparlo, de cara a la gravedad del problema. Si los estrategas gubernamentales suponen que el fingir ignorancia suprime la cuestión debían detenerse al menos en las repercusiones que el asunto está teniendo en la prensa internacional, para advertir su talla.

Pero, en realidad, el gobierno tienen plena conciencia de esta coyuntura. En el otro aspecto de su reacción, está rápidamente militarizando la región, se dirá que es apenas normal que eso ocurra, pues si un grupo de alzados amenaza el orden legal, éste ha de restablecerse. Pero el Ejército Zapatista y el Ejército Nacional deben regirse por lógicas, éticas y legalidades distintas. Los miembros de aquél son calificados como "infractores a la ley" por los comunicados castrenses. Y, sin embargo, se ha colocado a las fuerzas armadas regulares en situación semejante, porque sin que mediara instrucción formal alguna se ha hecho cargo de labores policíacas.

Sigue vigente (a menos que en las tempestades de reforma legislativa se hubiera decretado su modificación) el artículo 129 de la Constitución, que dispone que "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar".

Aunque el Ejército Zapatista haya declarado la guerra, ésta no existe para el gobierno mexicano, pues entrar en esa condición jurídica implica procedimientos que no se han cubierto. Igualmente la suspensión de las garantías individuales supone la entrada en operación del mecanismo previsto en el artículo 29, única posibilidad de instaurar el estado de emergencia. En Chiapas, sin embargo, esa condición de excepcionalidad jurídica rige ya, sin que nadie la haya decretado, o sin que nadie asuma la responsabilidad de hacerlo.

Romper el Estado de Derecho, en tales condiciones, no ha sido sólo el propósito de los insurgentes, sino que en ese objetivo han sido acompañados por el gobierno. Decirlo no surge de un escrúpulo formalista. Conciérne al destino inmediato de las comunidades afectadas por la presencia militar. Si sus efectivos no están ceñidos por la legalidad, su presencia será repudiada por la gente que encontrará tan ruinoso la presencia de una fuerza armada como la de otra. Y medir con el mismo rasero a combatientes que debieran quedar bien diferenciados es el principio de la verdadera solución social.